TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE COLIMA

NOTIFICADO: 23/SEP/2026

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TJA-1125/2025-F

ACTOR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

AUTORIDAD DEMANDADA
COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV)

MAGISTRADO INSTRUCTOR
FRANCISCO MIGUEL URZÚA BORJAS.

SENTENCIA DEFINITIVA

Colima, Colima, a **once** de **septiembre** de **dos mil veintiséis**.

VISTO para resolver en definitiva el juicio contencioso administrativo radicado bajo número **TJA-1125/2025-F**, encontrándose debidamente integrado el expediente para su resolución, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Presentación de la demanda

Mediante escrito presentado ante este Tribunal el día veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, por conducto del Licenciado J. Santos Dolores Villalvazo, en su carácter de Síndico Municipal del referido Ayuntamiento, demandó a la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), con motivo del requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, por la cantidad de $4,403,840.00 (cuatro millones cuatrocientos tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al periodo comprendido de noviembre de dos mil nueve a agosto de dos mil

veinticinco, así como del citatorio de veintinueve de septiembre y del acta de notificación de treinta de septiembre del mismo año.

El requerimiento se relaciona con el contrato número 0100057086 y con el inmueble identificado con la clave catastral 010-13-039-001, ubicado en avenida J. Merced Cabrera sin número, colonia Centro, en Villa de Álvarez, Colima.

SEGUNDO. Admisión de la demanda

Mediante auto procesal de fecha veintidós de octubre de dos mil veinticinco, se admitió la demanda interpuesta por el H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, por conducto del Licenciado J. Santos Dolores Villalvazo, en su carácter de Síndico Municipal del referido Ayuntamiento, contra la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV).

Se tuvieron como actos impugnados el requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, por la cantidad de $4,403,840.00 (cuatro millones cuatrocientos tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente al periodo comprendido de noviembre de dos mil nueve a agosto de dos mil veinticinco, respecto del contrato número 0100057086 y del inmueble identificado con la clave catastral 010-13-039-001; el citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco; y el acta de notificación de treinta de septiembre del mismo año.

En el propio auto se concedió a la parte actora la suspensión de los actos impugnados, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, por lo que la autoridad demandada debía abstenerse de realizar gestiones tendentes al cobro de la cantidad requerida, así como de cortar, suspender o disminuir el servicio de agua potable en el inmueble relacionado con el juicio. Asimismo, se requirió a la

autoridad demandada para que, dentro del plazo de veinticuatro horas, acreditara el cumplimiento de la medida cautelar.

Finalmente, se ordenó emplazar a la autoridad demandada para que, dentro del plazo legal correspondiente, produjera su contestación a la demanda.

TERCERO. Admisión de las pruebas de la parte actora

En el auto de radicación de la demanda se tuvieron por ofrecidas y admitidas a la parte actora las cinco pruebas siguientes: **1.- DOCUMENTAL,** consistente en el original del citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, expedido por CIAPACOV; **2.- DOCUMENTAL,** consistente en el original del acta de notificación de fecha treinta de septiembre de dos mil veinticinco, elaborada por personal de CIAPACOV; **3.- DOCUMENTAL,** consistente en la determinación fiscal derivada del requerimiento de pago de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, por la cantidad de $4,403,840.00 (cuatro millones cuatrocientos tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional); **4.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA;** y **5.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Pruebas que se desahogan por su propia naturaleza.

CUARTO. Cumplimiento de la suspensión

Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo a la autoridad demandada informando sobre el cumplimiento de la suspensión concedida a la parte actora, mediante el oficio DJ-CIAPACOV-489/2025, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

QUINTO. Contestación de la demanda

Mediante auto procesal de fecha primero de diciembre de dos mil veinticinco, se tuvo a la autoridad demandada, por conducto de su Director Jurídico, dando contestación a la demanda.

En el mismo proveído se ordenó correr traslado a la parte actora con la contestación y sus anexos, haciéndole de su conocimiento que le asistía el derecho de ampliar su demanda dentro del plazo legal correspondiente.

SEXTO. Admisión de las pruebas de la autoridad demandada

En el auto de contestación de demanda se tuvieron por ofrecidas y admitidas las siguientes pruebas de la autoridad demandada: **1.- DOCUMENTAL,** consistente en el citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, el cual obra en autos del presente expediente, prueba que hace suya para todos los efectos legales a que haya lugar; **2.- DOCUMENTAL,** consistente en el acta de notificación de fecha treinta de septiembre de dos mil veinticinco, la cual obra en autos del presente expediente, prueba que hace suya para todos los efectos legales a que haya lugar; **3.- DOCUMENTAL,** consistente en el requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, el cual obra en autos del presente expediente, prueba que hace suya para todos los efectos legales a que haya lugar; **4.- INSPECCIÓN,** consistente en que las partes y el personal de este Tribunal de Justicia Administrativa se trasladen al inmueble materia del requerimiento, ubicado en avenida J. Merced Cabrera sin número, entre las calles Tiburcio Aguilar y Enrique Corona Morfín, colonia Centro, en Villa de Álvarez, Colima, a espaldas de la biblioteca de la Casa de la Cultura, con la finalidad de verificar si cuenta o no con el servicio de agua potable proporcionado por CIAPACOV; **5.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA;** y **6.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.**

Asimismo, se desechó la prueba de inspección únicamente en cuanto pretendía verificar la prestación de los servicios de alcantarillado y

saneamiento, debido a que el personal de este Tribunal no cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para constatar esas circunstancias y la oferente omitió señalar los objetos, elementos y medios auxiliares que permitirían llevar a cabo dicha verificación.

SÉPTIMO. Desahogo de inspección

Mediante auto procesal de fecha siete de enero de dos mil veintiséis, se hizo constar que la parte actora presentó su ampliación de demanda fuera del plazo legal otorgado, por lo que se le tuvo por no ampliada la demanda.

En el mismo proveído se señalaron las diez horas del día cuatro de febrero de dos mil veintiséis para el desahogo de la prueba de inspección en el inmueble ubicado en avenida J. Merced Cabrera sin número, entre las calles Tiburcio Aguilar y Enrique Corona Morfín, colonia Centro, en Villa de Álvarez, Colima, a espaldas de la biblioteca de la Casa de la Cultura, con la finalidad de verificar si contaba con el servicio de agua potable proporcionado por CIAPACOV.

En la fecha y hora señaladas se llevó a cabo la diligencia de inspección y se hizo constar que en el inmueble sí fluía agua.

OCTAVO. Alegatos.

Mediante auto procesal de fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por desahogada en tiempo y forma la prueba de inspección y, al no existir pruebas ni diligencias pendientes por practicar, se concedió a las partes el plazo legal para formular alegatos por escrito.

Mediante auto procesal de fecha veinte de abril de dos mil veintiséis, se hizo constar que ambas partes formularon alegatos por escrito.

NOVENO. Turno para el dictado de la sentencia

Mediante el mismo auto procesal de fecha veinte de abril de dos mil veintiséis, al no existir pruebas ni diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó remitir los autos para la formulación del proyecto de sentencia definitiva, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 2; 5, punto 1, fracción I; 6; 7; 8 y 118, punto 1, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima; así como 1, 2 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

Lo anterior, porque se controvierten actos de carácter fiscal emitidos por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante los cuales se requirió al H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez el pago de derechos por servicios públicos. En dicha relación jurídica, la entidad pública actora se encuentra en una situación equiparable a la de un particular, en su carácter de usuaria de los servicios y sujeto requerido de pago.

SEGUNDO. Legitimación procesal

Con fundamento en los artículos 47, punto 1, fracciones I y II, inciso c); 48 y 51 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, y derivado del examen de las constancias que obran en el expediente, este

órgano jurisdiccional reconoce la legitimación procesal de las partes en el presente juicio.

TERCERO. Precisión de los actos impugnados

Del análisis integral del escrito de demanda y de los documentos anexos, este Tribunal advierte que la parte actora controvierte esencialmente los actos administrativos siguientes:

- El requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, emitido por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), mediante el cual se requirió al H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez el pago de la cantidad de $4,403,840.00 (cuatro millones cuatrocientos tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por conceptos relacionados con los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, impuesto al valor agregado, recargos y demás accesorios, respecto del periodo comprendido de noviembre de dos mil nueve a agosto de dos mil veinticinco, correspondiente al contrato número 0100057086 y al inmueble identificado con la clave catastral 010-13-039-001, ubicado en avenida J. Merced Cabrera sin número, colonia Centro, en Villa de Álvarez, Colima.
- El citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, levantado con motivo de la diligencia de notificación del referido requerimiento de pago.
- El acta de notificación de fecha treinta de septiembre de dos mil veinticinco, mediante la cual se hizo entrega formal del requerimiento de pago antes precisado.

Lo anterior se obtiene de una interpretación integral y armónica de la demanda, en relación con las documentales exhibidas por la parte actora, atendiendo a la verdadera intención de quien promovió el presente juicio contencioso administrativo.

Al respecto, resulta aplicable, por analogía y en lo conducente, el criterio orientador siguiente:

> *Registro digital: 181810. Instancia: Pleno. Novena Época. Materias(s): Común*
> *Tesis: P. VI/2004. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004, página 255. Tipo: Aislada*
>
> ***ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.***
>
> *El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.*

CUARTO. Análisis de las pruebas

Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 111 y 117, punto 1, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, se procede a analizar las pruebas desahogadas en el juicio conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, sin perjuicio de su valoración concreta al realizar el estudio de fondo de esta sentencia.

I. Pruebas de la parte actora

Con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, se otorga valor probatorio pleno a las documentales públicas consistentes en el original del citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, expedido por

CIAPACOV; el original del acta de notificación de fecha treinta de septiembre de dos mil veinticinco, elaborada por personal de dicha Comisión; y el original del requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, por la cantidad de $4,403,840.00 (cuatro millones cuatrocientos tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional).

Las documentales acreditan plenamente la existencia, emisión y contenido de los actos controvertidos, únicamente para esos efectos y sin que el valor probatorio que se les reconoce implique declarar anticipadamente su legalidad.

Respecto de la instrumental de actuaciones y de la presuncional legal y humana, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, se les reconoce valor probatorio en cuanto se encuentren relacionadas con hechos acreditados mediante las demás constancias que integran el expediente, atendiendo a su alcance concreto conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

II. Pruebas de la autoridad demandada

Respecto de las documentales consistentes en el citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, el acta de notificación de fecha treinta de septiembre del mismo año y el requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, al tratarse de las mismas documentales previamente valoradas y que la autoridad demandada hizo suyas, debe estarse a lo señalado respecto de su identidad, contenido y alcance probatorio.

Por otra parte, a la prueba de inspección practicada en el inmueble ubicado en avenida J. Merced Cabrera sin número, entre las calles Tiburcio Aguilar y Enrique Corona Morfín, colonia Centro, en Villa de Álvarez, Colima, a espaldas de la biblioteca de la Casa de la Cultura, se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 111 de la Ley de

Justicia Administrativa del Estado de Colima, únicamente para acreditar que, al momento de la diligencia, en el inmueble fluía agua.

No obstante, dicha probanza resulta insuficiente para acreditar por sí misma la legalidad del requerimiento de pago combatido o la debida determinación y cuantificación del adeudo, pues su alcance se limita exclusivamente a demostrar la existencia material del suministro de agua potable en el momento en que se practicó la inspección.

Respecto de la instrumental de actuaciones y de la presuncional legal y humana, se les reconoce valor probatorio en cuanto se encuentren relacionadas con hechos acreditados mediante las demás constancias que integran el expediente, atendiendo a su alcance concreto conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

QUINTO. Causal de improcedencia

En términos de los artículos 85 y 86 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, se procede al análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento que pudieran advertirse de las manifestaciones de las partes o actualizarse de oficio, por constituir una cuestión de orden público y estudio preferente.

Del análisis de las constancias que obran en el expediente, este Tribunal no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento; por tanto, procede realizar el estudio de fondo respecto de la legalidad de los actos impugnados.

SEXTO. Agravios y manifestaciones de las partes

Partiendo del principio de economía procesal y porque no constituye una obligación legal incluir en el texto del fallo la transcripción de los hechos y conceptos de impugnación formulados por la parte actora, así como de las manifestaciones expresadas por la autoridad demandada en

su contestación, se estima innecesaria su reproducción, toda vez que se tienen a la vista en el expediente para su debido análisis.

Lo anterior no exime a este Tribunal de examinar y resolver los planteamientos efectivamente formulados por las partes, conforme a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de las sentencias.

Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente:

Registro 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2ª./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

SÉPTIMO. Estudio de Fondo

Este Tribunal procede al estudio de los conceptos de impugnación formulados por la parte actora y, por cuestión de técnica jurídica, centrará el análisis en el planteamiento relativo a la indebida motivación del requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha

veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, mediante el cual se exigió el pago de $4,403,840.00 (cuatro millones cuatrocientos tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por el periodo comprendido de noviembre de dos mil nueve a agosto de dos mil veinticinco, respecto del contrato número 0100057086 y del inmueble identificado con la clave catastral 010-13-039-001.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia siguiente:

Registro digital: 167961. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: VI.2o.C. J/304 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 1677. Tipo: Jurisprudencia

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.

El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

Precisado lo anterior, este Tribunal estima fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado el concepto de impugnación relativo a la indebida motivación del requerimiento de pago combatido.

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, en lo conducente, que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante procedimiento seguido ante autoridad competente, en el que se cumplan las formalidades esenciales, y que todo acto de molestia debe constar por escrito, provenir de autoridad competente y encontrarse debidamente fundado y motivado.

En materia fiscal municipal, el artículo 37, fracción IV, del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima exige que los actos administrativos que deban notificarse se encuentren debidamente fundados y motivados, además de mencionar la resolución, objeto o propósito de que se trate. Tal disposición resulta directamente aplicable al requerimiento controvertido, al tratarse de un acto mediante el cual se determinó y exigió el pago de derechos por servicios públicos y sus accesorios.

La exigencia de fundamentación y motivación no constituye una formalidad secundaria o meramente ritual, sino una garantía de legalidad que permite al sujeto requerido conocer con precisión las razones jurídicas y fácticas que sustentan el acto de autoridad y controvertirlo de manera eficaz.

Tratándose de actos de determinación o requerimiento de pago, la autoridad no sólo debe citar las normas que estime aplicables, sino expresar de manera clara, suficiente, completa y verificable la forma en que obtuvo la cantidad exigida, proporcionando los datos y operaciones que permitan al sujeto requerido comprobar la exactitud del crédito determinado.

En el caso concreto, del análisis del requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco se advierte que CIAPACOV requirió al H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez el pago de $4,403,840.00 (cuatro millones cuatrocientos tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), por conceptos relacionados con saldo anterior, servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento, impuesto al valor agregado, recargos y demás accesorios, respecto del periodo comprendido de noviembre de dos mil nueve a agosto de dos mil veinticinco, correspondiente al contrato número 0100057086 y al inmueble identificado con la clave catastral 010-13-039-001.

Sin embargo, aun cuando el requerimiento contiene una relación global de conceptos e importes, ello no satisface la exigencia constitucional y legal de motivación, pues la autoridad demandada omitió precisar en el propio acto los datos mínimos indispensables para que la parte actora pudiera conocer, revisar y controvertir la forma en que se integró el crédito reclamado.

En particular, del requerimiento impugnado no se advierte que la autoridad hubiera señalado de manera individualizada los metros cúbicos consumidos o suministrados en cada periodo de facturación; las lecturas iniciales y finales del medidor, en su caso; el valor unitario o la tarifa aplicada; las operaciones aritméticas empleadas para obtener cada importe; la forma en que se integró el denominado saldo anterior; el procedimiento utilizado para calcular los recargos y la base sobre la cual fueron determinados; la base empleada para calcular el impuesto al valor agregado; ni el desglose correspondiente a cada uno de los periodos comprendidos en la determinación.

No basta que el requerimiento contenga una tabla general con conceptos e importes acumulados, pues dicha circunstancia únicamente permite conocer el resultado final del cobro, pero no los datos, razones y operaciones que condujeron a ese resultado.

La motivación de un acto fiscal no se satisface con la simple expresión de cantidades globales, sino con la exposición clara y suficiente del procedimiento jurídico, técnico y aritmético que permitió a la autoridad determinar el monto exigido.

En ese sentido, el acto impugnado deja a la parte actora en estado de indefensión, porque le impide verificar si los consumos atribuidos corresponden a los servicios efectivamente prestados; si las tarifas aplicadas son las correspondientes a cada periodo; si los recargos fueron calculados conforme a derecho; si el impuesto al valor agregado se determinó sobre una base correcta; si el saldo anterior deriva de

obligaciones legalmente exigibles; y si la cantidad final reclamada corresponde efectivamente a los conceptos y servicios indicados por la autoridad.

El resultado de la prueba de inspección, mediante la cual se hizo constar que en el inmueble fluía agua al momento de la diligencia, no subsana la deficiencia advertida. Esa prueba únicamente acredita la existencia material del suministro en la fecha en que fue practicada, pero no demuestra los consumos correspondientes a cada periodo, las tarifas aplicadas, las operaciones realizadas ni la correcta integración de la cantidad requerida.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal que la autoridad demandada formuló, al contestar la demanda, diversas explicaciones relativas al sistema de facturación, consumo, tarifas, recargos y demás elementos vinculados con la determinación del adeudo.

Sin embargo, tales manifestaciones no pueden subsanar ni perfeccionar la motivación del acto impugnado, toda vez que la fundamentación y motivación deben constar en el acto desde el momento de su emisión y notificación, y no integrarse posteriormente con motivo de la contestación de la demanda.

Aceptar lo contrario implicaría permitir que la autoridad administrativa complementara en juicio las razones que omitió expresar al emitir el acto, lo cual vulneraría la garantía de legalidad y colocaría a la parte actora en una posición de desventaja procesal, al obligarla a controvertir razones y cálculos que no conoció al momento en que el requerimiento le fue notificado.

Por ello, la legalidad del requerimiento debe analizarse atendiendo a su contenido propio y no a las explicaciones posteriores formuladas por la autoridad demandada. El juicio contencioso administrativo tiene por objeto revisar la legalidad del acto en los términos en que fue emitido, no

permitir que la autoridad reconstruya o mejore extemporáneamente su motivación.

En consecuencia, este Tribunal considera que el requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco carece de la motivación suficiente exigida por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 37, fracción IV, del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, al no contener los elementos mínimos necesarios para conocer la forma en que se determinó la cantidad requerida.

Lo anterior no implica desconocer, en abstracto, las facultades de CIAPACOV para prestar servicios públicos, emitir cobros o requerir el pago de los créditos que estime procedentes conforme a la normativa aplicable. Sin embargo, dichas facultades deben ejercerse mediante actos debidamente fundados y motivados, que permitan al sujeto requerido conocer de manera cierta, completa y verificable el origen y cuantificación del adeudo.

Por cuanto hace al concepto de impugnación relativo a la prescripción, el artículo 65 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima dispone que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, contado a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Asimismo, establece que dicho plazo se interrumpe con cada gestión de cobro que la autoridad fiscal notifique o haga saber al contribuyente, o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito.

En el caso concreto, el requerimiento impugnado comprende de manera general el periodo de noviembre de dos mil nueve a agosto de dos mil veinticinco; sin embargo, no individualiza la fecha en que cada obligación pudo ser legalmente exigida ni precisa, respecto de cada una, la existencia de posibles actuaciones interruptivas.

En esas condiciones, este Tribunal no cuenta con los elementos necesarios para determinar cuáles periodos específicos se encuentran prescritos. Por tanto, si la autoridad demandada estima procedente emitir una nueva determinación, deberá analizar individualmente la exigibilidad de cada crédito, aplicar las reglas previstas en el artículo 65 del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima y abstenerse de exigir aquellos respecto de los cuales se hubiera consumado la prescripción.

En ese sentido, al haberse acreditado que el requerimiento impugnado no contiene una motivación suficiente respecto de la determinación del crédito exigido, procede declarar su nulidad lisa y llana, de conformidad con el artículo 118, punto 2, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

La nulidad debe extenderse al citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco y al acta de notificación de fecha treinta de septiembre del mismo año, al constituir actos accesorios y dependientes del requerimiento declarado nulo.

Ello es así porque dichos actos tuvieron como finalidad hacer del conocimiento de la parte actora el requerimiento combatido, de manera que, al carecer éste de validez jurídica, sus actos de comunicación no pueden subsistir de manera autónoma.

Finalmente, al resultar fundado y suficiente el concepto de impugnación analizado para declarar la nulidad del requerimiento de pago combatido, resulta innecesario estudiar los restantes planteamientos formulados por la parte actora, incluidos aquellos relacionados con la exención constitucional invocada, la naturaleza jurídica del cobro y demás cuestiones de fondo, pues aun de resultar fundados no mejorarían el beneficio jurídico alcanzado con la nulidad lisa y llana del acto impugnado.

Por tanto, lo procedente es declarar la nulidad lisa y llana del requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, correspondiente al contrato número 0100057086 y al inmueble identificado con la clave catastral 010-13-039-001, ubicado en avenida J. Merced Cabrera sin número, colonia Centro, en Villa de Álvarez, Colima, emitido por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como del citatorio de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco y del acta de notificación de fecha treinta de septiembre del mismo año, de conformidad con los artículos 117 y 118, punto 2, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima, por las razones expuestas en el presente Considerando.

S E R E S U E L V E:

PRIMERO. Este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima es competente para conocer y resolver el presente juicio contencioso administrativo, en términos de lo expuesto en el Considerando Primero de esta sentencia.

SEGUNDO. La parte actora acreditó los extremos de su pretensión; en consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana del requerimiento de pago de derechos por servicios públicos de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco, correspondiente al contrato número 0100057086 y al inmueble identificado con la clave catastral 010-13-039-001, emitido por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), así como del citatorio de fecha veintinueve de septiembre y del acta de notificación de fecha treinta de septiembre de dos mil veinticinco, por las razones expuestas en el Considerando Séptimo de esta sentencia.

TERCERO. Se dejan a salvo las facultades de la autoridad demandada para que, de estimarlo procedente, emita una nueva

determinación exclusivamente respecto de los créditos no prescritos, mediante un acto debidamente fundado y motivado.

Notifíquese como en derecho proceda.

Así, lo resolvieron por unanimidad y firman las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

YARAZHET CANDELARIA VILLALPANDO VALDEZ

MAGISTRADO

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA

MAGISTRADO

FRANCISCO MIGUEL URZÚA BORJAS

MAGISTRADA

MÓNICA LILIANA CAMPOS MAGAÑA

MAGISTRADA

NORMA ARACELI CARRILLO ASCENCIO

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

ERIKA ZUGHEY PEÑA LLERENAS

La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima el día once de septiembre de dos mil veintiséis, dentro del expediente contencioso administrativo con clave TJA-1125/2025-F, relativo a la impugnación de un crédito fiscal emitido por la CIAPACOV.

Notificada a la parte actora de la sentencia definitiva que antecede, el día

Notificada a la autoridad demandada de la sentencia definitiva que antecede, mediante oficio con número